



Régimen político está podrido

¡QUE SE VAYAN TODOS!

Congresistas "mochasuellos"

Continuar la lucha hasta derrotarlos

UN RÉGIMEN ZOMBI

pág. 2

TOMAR LAS CALLES CONTRA LA ALIANZA DE GOBIERNO

pág. 3

ESPECIAL: FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA REBELIÓN DEL SUR

pág. 4

ESPECIAL: LA REBELIÓN EN EL SUR

pág. 6

ESPECIAL: LAS BANDERAS DEL SUR Y EL GERMEN DE LA REVOLUCIÓN

pág. 8

ESPECIAL: DERECHO A LA PROTESTA Y AUTODEFENSA

pág. 11

Israel rompe el alto el fuego y redobla su ofensiva genocida

pág. 12



¿Ante qué estamos?

Un régimen zombi

Grave enfrentamiento entre la fiscal de la Nación y el gobierno desnudan su podredumbre y los ponen al borde del abismo.

El 14 de septiembre del año 2000 los peruanos fuimos sorprendidos por unos vídeos difundidos en cadenas de Tv. en los que se veía a Vladimiro Montesinos en su salita del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) entregando fajos de dinero a empresarios, periodistas y políticos que entonces apoyaban al gobierno. Nadie en aquel momento abrigaba dudas sobre la entraña corrupta y dictatorial del régimen. Pero el vídeo hizo caer el último velo que lo ocultaba y prendió la chispa que detonó la enorme movilización que condujo a su caída.

Los vídeos —o vladi-videos como se conocerían— serían filtrados por una estrecha colaboradora del régimen, Matilde Pinchi Pinchi, mostrando que entre bandidos y criminales no existe lealtad sino predomina la traición. Esta historia vuelve a repetirse ahora bajo el régimen reaccionario de Boluarte y sucede nada menos a días de cumplirse un año de su imposición sangrienta contra las protestas populares colocando en agenda la urgencia de echarlo.

Ante qué estamos

El 27 de noviembre se hicieron públicos algunos chats (luego aparecieron otros audios) intercambiados por un asesor de la fiscal de la nación, **Patricia Benavides**, y un congresista. En ellos se escuchan acuerdos mafiosos de venta de votos a cambio de impunidad para un grupo de parlamentarios, votos que



Foto: Oira Mirada

nada menos serían para favorecer el plan de copamiento de instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la misma Fiscalía de la Nación, en favor del régimen actual, que pretende perennizarse para favorecer a los grandes grupos de poder económico.

Ante estas revelaciones, el equipo anticorrupción de la Fiscalía —subordinados de la propia Patricia Benavides—, allanaron sus oficinas y ordenaron la detención de sus asesores bajo la acusación de “presunta organización criminal”. Esto es: nada menos que la principal operadora del régimen, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, la que armó todo el tinglado acusatorio contra Pedro Castillo por “encabezar una organización criminal” para propiciar su destitución, hoy es acusada de lo mismo, pero con pruebas reales.

La fiscal Benavides, por

su parte, que ya venía de destituir a otros magistrados que no le eran adictos y de desmontar los equipos que investigan Lava Jato y los Cuellos Blancos, los casos de corrupción más grandes de la historia de la República y entre los que

« **La inestabilidad es tan grande que los grupos mediáticos y de poder que crearon a esta criatura que encabeza Boluarte, (...) aceptan sacrificar a Patricia Benavides para que todo siga igual hasta el 2026.** »

se cuenta la que se sigue a **Keiko Fujimori**, contrató apuntando más arriba: contra Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, planeando otra **denuncia** por los crímenes cometidos en la represión de las protestas del sur; a todas luces, con manotazos de ahogado.

Ampliando el drama, una resolución del Tribunal Constitucional volvió a actualizar el tema del **indulto** al ex dictador Alberto Fujimori, que purga una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La resolución, aunque es insuficiente para resolver el indulto, solo sirvió para despertar entusiasmo en el antro fujimorista desatando una mayor indignación nacional que ya se pronuncia con movilizaciones, como la del sábado 03.

La inestabilidad creada es tan grande que los grupos mediáticos y de poder que crearon y amamantaron a esta criatura que encabeza Boluarte, y a la que pintaron como legítima, democrática, impoluta y verdadera salvadora de la Nación, hoy se rasgan las vestiduras, piden calma, diálogo y, en el peor de los casos, aceptan sacrificar a Patricia Benavides para que todo siga igual hasta el 2026.

Pero ya nada será igual. El trípode del poder (Go-

bierno, Fiscalía, Congreso) se ha fracturado y ninguno puede sostenerse sin el otro. Aunque pretenda continuar, lo que todo el mundo ve es a un régimen zombi, un muerto en vida que clama por ser enterrado.

De mal en peor

Lo que sucede, junto con poner al desnudo la entraña reaccionaria del régimen, también descubre su **precariedad**. Precariedad de origen porque surgió producto de un pacto de bandidos entre grupos mafiosos del Congreso (los “niños”, representantes de bancadas dueños de universidades), la “izquierda” predatora del Estado (Perú Libre, Bloque Magisterial) y la derecha; donde esta última es la que dirigía el pacto con el plan de copar las instituciones para ponerlos a tono de los grandes intereses empresariales y para contrarrestar las protestas y toda amenaza de cambio venida de abajo. Pero como todo pacto entre bandidos, era precario y, sobre todo, odiado por las mayorías. Hasta que se produjo el actual quiebre.

Así, con la desgracia del régimen, se cae toda la narrativa con la que se justificó el cambio de Castillo por Boluarte. Se decía “Castillo ahuyenta la inversión”; pero con el actual gobierno hay menos inversión y, peor, hay **recesión y una mayor crisis** que eleva la pobreza a un tercio de la población. Se decía “Castillo y su entorno son corruptos”, y la derecha buscó destituirlo ungida de ropajes puritanos hasta que dieron pie a su suicidio político; pero el actual gobierno resulta más corrupto, y hasta le abre las puertas de la impunidad a los peces gordos de Lava Jato, Los Cuellos Blancos y a la propia Keiko Fujimori.

Con la destitución de Castillo se pretendió tam-

bandera socialista

Año XLIV - N° 142 | Diciembre de 2023

Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITci

Dirección: Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 407, Lima

Director: Eduardo Pflucker

Redacción: Freddy Salazar | Antonio Encinas | Víctor Montes | Clarita López | Manuel A. Fernández
| Jack Reyes | Alex Díaz | Mauricio MecaCorresponsales: **Arequipa:** Evaristo Checa | **Iquitos:** Renato Achata | **Pucallpa:** Suliana Talaverano | **Cusco:** Juan C. Pumacchua

Diseño y Diagramación: Alex Díaz | Depósito Legal: 2004-8512

bién restablecer el “orden democrático” y “constitucional”; pero el “orden” que nos devolvieron fue el de las balas, el asesinato impune y la criminalización de la protesta.

Con Castillo estábamos muy mal porque traicionó sus promesas; pero aun así mantenía legitimidad. Con el gobierno actual estamos mil veces peor y sus crímenes, como el absoluto rechazo popular que lo rodea, lo volvió del todo ilegítimo.

Lo que sucede, entonces, no solo vuelve legítimas y justas las grandes luchas de diciembre-enero, y sobre todo sus banderas democráticas en contra del gobierno, el Congreso y el podrido régimen, y en busca de un cambio verdadero planteado a través de una Asamblea Constituyente.

¿Tanto nadar para ahogarnos otra vez en la orilla?

Esta es la problemática de fondo por la que el país vive polarizado desde hace un año, y no la que se pinta desde los salones de Palacio. La gran lucha de inicios de año no ganó pese a la precariedad del régimen, solo por la traición de las direcciones que la dejaron sola a expensas de la represión. Ahora puede suceder lo mismo, o dejarla en medio camino.

Ante el hundimiento de la alianza derechista de gobierno ahora los partidos y sectores del **centro democrático burgués** buscan canalizar una salida institucional, “diálogo” de por medio, entre los diversos sectores burgueses incluidos a los que sostienen a Boluarte, para un **adelanto de elecciones**. Ante el temor de perder todo, pretenden dar una salida ordenada al desecho en que se han convertido el gobierno, el régimen y todo el Estado, es decir toda la “democracia burguesa”, para volver a ella con las mismas elecciones de siempre.

Este plan de salvataje, sin embargo, solo puede realizarse con el apoyo de las direcciones de la CGTP y del sector de izquierda reformista de Verónica Mendoza, quienes desde el inicio ya tomaron distancias de la sublevación del sur pretendiendo ser más leales a la “democracia” burguesa. Por eso, mientras con una mano buscan el diálogo para presionar un nuevo calendario electoral, con la otra tratan de utilizar el descontento nacional y las movilizaciones para llevarlas hacia ese objetivo. El adelanto de elecciones no sirve con la continuidad de Boluarte y el Congreso. Deben irse todos, y los cabecillas a la cárcel.

La movilización y lucha son fundamentales en estas horas, sobre todo de la clase obrera, pero con **independencia de clase** y levantando más que nunca las banderas del sur legitimadas con la sangre de muchos luchadores.

Tomar las calles contra la alianza de gobierno, uniéndolas de lucha obreras y populares

Se cumplió un año de la usurpación ilegítima del poder por parte de Dina Boluarte quien, en complicidad con el Congreso, emprendieron una represión criminal de las protestas democráticas con 60 muertos y cientos de heridos graves, y burlaron el clamor nacional por un adelanto de elecciones (el tema es tratado en forma especial en esta edición). Y, cuando nuevas jornadas contra la impunidad del actual régimen ya se habían anunciado, estalló un nuevo escándalo que develó el funcionamiento delincuencia de la actual alianza de gobierno, donde sus integrantes se blindan entre sí como organizaciones criminales, y buscaban eliminar toda posible amenaza pretendiendo un control absoluto del poder.

En el caso particular de la principal protagonista del destape, la fiscal de la nación Patricia Benavides, ella preside una organización criminal que compró votos de congresistas (a cambio de archivar investigaciones en su contra) para destituir a la anterior Fiscal de la Nación, elegir tramposamente al nuevo Defensor del Pueblo que es un puesto clave para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); y, vinculado a lo anterior, promover la destitución de los actuales magistrados de la JNJ para remplazarlos por otros más dóciles a la alianza mafiosa.

Este destape tiene un significado similar a la filtración del primer “vladivideo” en setiembre 2000, que fue el elemento que precipitó la caída de una dictadura fujimorista ya muy golpeada por la movilización nacional (la memorable marcha de los cuatro suyos). La indignación nacional hoy es muy grande y ha motivado el inicio de un proceso de movilizaciones con la bandera “que se vayan todos”.

Tan insostenible como la impunidad de la fiscal de la nación, es la impunidad de Dina Boluarte. La propia Patricia Benavides,



hasta hace poco estrecha amiga de la presidenta, tuvo que soltar la denuncia constitucional contra esta y sus ministros, de homicidio calificado por los muertos y heridos de las protestas. Ese acto de la fiscal causó indignación en los deudos y pueblos afectados, por instrumentalización y fallas de la denuncia, pero el contenido de la acusación es incuestionable y está ampliamente documentado.

Estos hechos se desarrollan, además, en un contexto de total incapacidad e inoperancia del gobierno frente a la recesión económica, la inflación, los embates climáticos y una inédita escalada de la delincuencia, que está empujando a grandes sectores de la población a la pobreza, a poco tiempo de haberse producido los peores embates de la pandemia por coronavirus.

La situación no da para más, pero el gobierno y el Congreso se mantienen contumaces atorillados al poder, con la misma política de criminalización de las luchas. Y no se quedan solo por sus propios medios; es evidente y condenable la política de las bancadas de la izquierda reformista en el Congreso y las direcciones de las principales centrales sindicales, que han priorizado en los hechos la conciliación con el actual régimen.

Sin embargo, nuevas luchas vienen confluendo en el país

con diversas banderas: contra la impunidad del gobierno por los asesinatos en protestas, contra la fiscal Benavides y las mafias en el poder, que se vayan todos; así como también luchas reivindicativas y por demandas urgentes ante la inflación, la recesión, el fenómeno El Niño, y la creciente ola delincencial.

Asimismo, la participación obrera en las luchas se está fortaleciendo impulsada por la defensa del empleo, el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales y sindicales amenazados por la patronal y el gobierno.

Tomar las calles es una **necesidad imperiosa** para poner fin a esta situación y sacar del poder a las mafias enquistadas, y eso requiere la **unidad más amplia** de las organizaciones obreras y populares. El objetivo no se reduce a “purificar” las instituciones que en los últimos 30 años legalizaron la implantación de un plan económico a favor del enriquecimiento de grandes corporaciones y transnacionales, y lo siguen haciendo ahora, cuando están profundamente corrompidas; el objetivo es hacer posible las demandas y soluciones concretas a los problemas urgentes que atropellan la dignidad popular y que empobrecen a las masas.

En ese sentido, las **demandas democráticas** que hace un año remecieron al sur y a la capital, como Fuera Dina y el Congreso (y ahora la Fiscal Benavides), prisión a los asesinos, por elecciones inmediatas y asamblea constituyente, cobran **más vigencia que antes**, y deben abrir el camino a una fórmula de gobierno y de poder obrero y popular.

Factores económicos y sociales de la rebelión del sur

A un año del estallido social del sur profundo, las causas políticas, económicas y sociales no solo no se han extinguido sino más bien se han agudizado. El hecho empezó como una reacción radical de protesta frente a la interrupción del gobierno del expresidente Pedro Castillo, por parte de una población para la que el intento de golpe de Estado de Castillo, que finalmente no se consumó y no tenía manera de consumarse, no era más grave que la constante hostilización y boicot de las fuerzas reaccionarias atrincheradas en el Congreso en su propósito de usurpar la elección popular. Sin embargo, las causas de la rebelión son más profundas que una simple manifestación de solidaridad o de simpatía política; en esta nota nos referiremos a algunas de las causas que en parte explican las luchas de la sierra sur.

Entre las causas del estallido hay deudas no saldadas desde la colonia donde la población indígena fue sometida a las peores prácticas de opresión, explotación y hasta exterminio, y en 200 años de vida republicana no hubo más que soluciones parciales, en gran medida arrancadas solo después de memorables luchas campesinas. Eso sería solo historia del pasado, si no fuera que la opresión clasista y racista sigue siendo uno de los principales instrumentos de las clases dominantes, tal como se ha visto en treinta años de plan neoliberal que profundizó la desigualdad, así como en la pandemia que develó la pobreza nacional y en la propaganda del “terruqueo” predominante en las últimas elecciones generales de 2021 y durante el gobierno Castillo.

El rechazo a la estafa neoliberal

El plan neoliberal impuesto por la dictadura fujimorista, y continuada por los sucesivos gobiernos “democráticos”, permitió una exorbitante creación de riqueza, pero esta fue dirigida a las grandes corporaciones y transnacionales por diferentes medios: entrega en condiciones de regalo de empresas públicas y de ricos yacimientos de recursos naturales; regímenes laborales “promocionales” como el de

exportaciones no tradicionales, la tercerización laboral --utilizadas masivamente en la minería--, y el derrotado régimen de promoción del agro, que son regímenes de sobre explotación que mantienen a los trabajadores, los verdaderos creadores de la riqueza, en el borde de la pobreza.

El plan neoliberal, además, empezó con despidos masivos en los sectores público y privado y el dismantelamiento del Estado, especialmente de la salud y la educación públicas.

La “bonanza” neoliberal nunca significó una mejora significativa de la economía de las masas populares. Peor todavía, en ningún momento implicó trabajo para toda la población ni mucho menos; ese auge coexistió con una economía informal e ilegal de la que depende una enorme masa laboral, principalmente en la minería informal o ilegal, el comercio, el transporte, que sirven de refugio, pero en condiciones laborales más deplorables.

El reducido empleo formal y los bajos salarios desnudan no solo los altos niveles de sobre explotación sino también el ínfimo nivel de industrialización que caracteriza a la economía nacional, y este es el resultado del papel que el imperialismo impone al país de productor de



Puno fue la región que más tiempo tuvo bloqueadas sus vías en protesta contra el gobierno.

materias primas, cerrado a cualquier posibilidad de desarrollo de la economía nacional. En otras palabras, la burguesía no tiene nada que ofrecer que no sea un sistema de explotación de la riqueza y un modelo basado en la producción de materias primas y alimentos envasados.

El resultado, una desigualdad social en niveles extremos, donde la peor parte la llevan los pueblos del interior en general, y de la sierra sur en particular ya que ellos son los que padecen los más altos niveles de pobreza, desempleo y subempleo.

Esa realidad explicó que una candidatura casi desconocida consiguiera escalar el 2021 con el lema “no más pobres en un país rico”, que, aunque

solo fue declarativo, tuvo a la vez que un mensaje de denuncia, uno de promesa que los pueblos del interior hicieron suyo.

La vena clasista y racista de la burguesía en la campaña electoral 2021

La relación del movimiento de masas con el plan neoliberal fue de resistencia y confrontación tal como muestra la larga lista de conflictos sociales de las últimas dos décadas, aunque atomizados y dispersos. El descontento fue capitalizado por diferentes partidos burgueses o reformistas que captaron los votos con falsas promesas de cambio para traicionarlas a los pocos días una vez llegados al gobierno, no sin ir profundizando la crisis del régimen de falsa democracia.

En el 2021, Castillo logró sacar la mayor votación con solo de 13% y pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, no solo la candidata de los ricos, heredera de la dictadura corrupta y criminal de su padre en los noventa, y ella misma procesada por lavado de activos y sus vínculos con la mafia judicial.

La segunda vuelta fue altamente polarizada. De un lado Pedro Castillo ofrecía la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros y gasíferos, una nueva constitución política y la consigna “¡no más pobres en un país rico!”, mientras los defensores de la intocabilidad del modelo económico y la actual constitución, los





Foto: Darío La República

Protesta frente a Edificio Seguridad de Estado, por la libertad de los detenidos.



Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Manifestantes entran al aeropuerto de Ayacucho durante protestas.



Foto: José Sotomayor Jiménez / EFE

Bloqueo de carretera durante la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte en Arequipa.

principales grupos de poder económico y sus partidos se unieron en una campaña demoledora contra Castillo asociándolo mañosamente al terrorismo y al senderismo.

Esa fue una campaña contra el candidato, pero con una propaganda que desnudó toda la vena clasista y racista de la patronal, provocando un mayor repudio popular especialmente de los pueblos del interior, y que se hizo más descarada después del resultado electoral y durante el gobierno de Castillo.

Las luchas del sur no fueron un rayo en cielo sereno

La población del interior tiene un ya largo historial de luchas y estallidos en defensa del campo

y su medioambiente como fuente de supervivencia, enfrentando proyectos mineros y petroleros y gobiernos que privilegian a las empresas por encima de los intereses de la población campesina, a pesar de que de estos sectores depende la seguridad alimentaria de la población nacional. Más de cien conflictos sociales con hechos de violencia se producen cada mes desde hace años como respuesta a la prepotencia de empresas mineras en impacto ambiental, acaparamiento de vías y del recurso escaso del agua, o la imposición de proyectos contra la voluntad popular.

La situación empeoró aún más con la pandemia, el campo se convirtió en actividad de refugio para

sectores de la población urbana que migraron por pérdida del empleo o cierre de su actividad económica, y continuaron las protestas en temas como el reparto del recurso hídrico, disposición de créditos promocionales, obras de infraestructura o medidas frente a desastres climáticos o crisis como la de los fertilizantes.

El gobierno de Castillo no representó un cambio en el meollo de la política económica neoliberal. La opción tomada por Castillo, de ceder sucesivamente a las presiones de la oposición como principal medio para conseguir gobernabilidad, hizo que fuera dejando de lado los anuncios de campaña para terminar defendiendo sin mediaciones el

plan económico. Eso, sin embargo, no lo libró de la hostilización y la amenaza de una vacancia y ganó cierto rechazo de sectores populares.

Los conflictos sociales no se diluyeron sino más bien crecieron y se hicieron más intensos; uno de los más saltantes fue el de los movimientos campesinos contra la falsa “segunda reforma agraria”, denunciando cómo se privilegiaba a los agroexportadores, y la inoperancia frente a la crisis de fertilizantes. También estallaron luchas populares contra los abusos de mineras como Las Bambas.

Pero la burguesía y sus partidos habían llevado la confrontación a otros terrenos con su discurso reaccionario, autoritario, clasista y racista.

El gobierno de Castillo llevó las demandas populares al terreno de las mesas de diálogo y reuniones descentralizadas de consejo de ministros con participación de organizaciones populares. Y mientras el gobierno trabajaba para evitar un mayor escalamiento de los conflictos, el Congreso seguía impulsando la vacancia. Entonces la confrontación de las luchas pasaba a ser contra el Congreso, más aún cuando, en una de las reuniones descentralizadas de consejos de ministros,

el gobierno aprobó la demanda de asamblea constituyente.

Si bien no hubo soluciones, las organizaciones populares, aunque desigualmente, fortalecieron su organización en el debate de las principales demandas y vías de solución, y en ese proceso, la consigna de la campaña electoral por una asamblea constituyente se convirtió en una bandera de lucha de las propias organizaciones populares, junto con la de cierre del Congreso.

Contradictoriamente, este avance no resolvió el problema de la dispersión de las luchas y nunca llegó a estructurarse una respuesta nacional y en eso hay una responsabilidad fundamental de las organizaciones políticas, sindicales y gremiales del movimiento popular.

En ese contexto se dio un nuevo intento de vacancia y el fallido autogolpe de Castillo, que aceleró su destitución, y la reacción principalmente de la población del sur, que tomó la vanguardia en una lucha que en realidad es de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel nacional. Las causas que afectan a todos, ahora se profundizan ante una recesión, inflación y los embates del Niño, una profunda crisis política en la que la patronal impone sus condiciones.



Los principales hechos

Desde la vacancia de Castillo y su encarcelamiento realizado el mismo día, se desarrolló en el sur del país un proceso insurreccional con banderas, que a los ojos de la mayoría de ciudadanos, podían aparecer insólitas, pero que eran legítimas. Fue un hecho semejante a la revolución agraria de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando los menos favorecidos se convirtieron en protagonistas de un hecho histórico.

El sistema político vive una larga crisis que se expresó de manera distorsionada en la segunda vuelta de las últimas elecciones del 2021. Castillo apareció como la esperanza de los sectores que desean un cambio radical del plan económico que los había marginado aún más con la pandemia y cuyas consecuencias sufrían aún entonces. Al ser ese candidato acorralado una y otra vez por la ultraderecha, vacado del gobierno y por último encarcelado, vieron en todo este proceso un atentado contra su voto y sus esperanzas de cambio, en especial a través de una Constituyente.

Al inicio, gran parte del país vio este proceso como una simple sublevación de los seguidores de Castillo. Pero la ultraderecha en el gobierno lo trató como la continuidad de su intento de autogolpe de Estado y, en esa línea, dispuso contra ella una cruenta represión para lo cual empezaron por terruquearla.

La primera etapa del proceso

El radicalismo con que se inició la protesta en el sur evidenciaba a todas luces la disposición de los manifestantes a enfrentarse a las grandes empresas privadas –como la fábrica Gloria que fue atacada– y a toda entidad pública, con la toma de aeropuertos, ataques a comisarías y fiscalías, enfrentamiento al ejército; es decir, contra todo lo que simbolizaba al podrido régimen político y económico del país. Todo esto bajo las consignas democráticas de cierre del Congreso, caída de Dina Boluarte, liberación de Pedro Castillo y la convocatoria a una Constituyente;

demandas que ponían en jaque al orden constitucional y “democrático”, orden con la que se identifican sobre todo los sectores de clase media acomodada.

Con el pasar de los días este escenario de protestas se fue radicalizando debido a la respuesta criminal del gobierno. A partir del 12 de diciembre dictó estado de emergencia en las regiones de Apurímac, Ica y Arequipa; posteriormente a nivel nacional a partir del 15 del mismo mes. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023, se contabilizaron más de **1300 acciones de protesta**, entre movilizaciones, plantones y vigiliadas. Asimismo, 145 puntos del país fueron bloqueados, sobre todo en las regiones del Norte y Sur del país, en las que además se interrumpieron los servicios de los aeropuertos en las ciudades de Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas, por su toma o la tentativa de hacerlo por parte de miles manifestantes.

La nueva etapa y carácter de la lucha

El 9 de enero del 2023 fue el día más mortífero de la rebelión, cuando 18 civiles fallecieron en medio de la represión en la ciudad de Juliaca, Puno. Este trágico día fue el punto de inflexión en la protesta convirtiéndola en una lucha contra la represión y por justicia para los asesinados. Sin embargo, sectores como el estudiantado universitario y los obreros de las zonas urbanas, aún se mantendrían al margen. Es así que las delegaciones de distintas regiones



Marcha contra el gobierno de Dina Boluarte en Arequipa.

se movilizaron a la capital con la expectativa de ganar apoyo.

Muchos pobladores de las distintas regiones rodearon de solidaridad a los que se ponían al frente para venir a la capital a hacerse oír y buscar el apoyo de otros sectores, utilizando para ello sus pequeños ahorros, vendiendo sus ganados y realizando colectas. Pues todos sentían el maltrato por el centralismo del país y el racismo de las autoridades, como cuando Dina Boluarte encaró diciendo que “Puno no era el Perú”.

Las diferentes delegaciones en Lima hicieron una serie de movilizaciones buscando el respaldo de la capital. Hubo una importante solidaridad de varios sectores populares de los conos norte, sur y este. Pero la respuesta no tuvo el arrastre que se esperaba, pues el principal sector, la clase obrera, que debió meterse en la lucha no se incorporó a ella con todo, como lo hacían gran parte de los pobladores puneños, parando la producción, bloqueando carreteras, organizando piquetes, movilizándose.

El llamado a la “solidaridad” de la CGTP sin mostrar firmeza en ir con todo por las demandas organizando un verdadero **paro**

nacional, fue una gran decepción para los luchadores del sur. De la misma forma que la acción de los diferentes partidos como Nuevo Perú, Frente Amplio, Patria Roja, Partido Comunista Peruano.

La percepción de los luchadores fue de decepción, en especial por ver a la principal central de trabajadores, la CGTP, no hacer el esfuerzo por meterse en esta lucha, al punto que la llamaron “traidora” en plena movilización después que su dirección dejara simplemente un documento en el Congreso para que, supuestamente, sea “atendido”. En plena represión y con un gobierno dictatorial, entregar papelitos a dicha institución desprestigiada y odiada, parecía absurdo. De ahí que el camino que trazaron las regiones, en especial Puno, fue continuar la lucha hasta lograr el fin del régimen y del gobierno, y aspirar a administrar el poder con sus propias manos. No es una utopía, ya ocurrió en los años 60 con las tomas de tierras bajo la dirección de Hugo Blanco.

Este es un fragmento de lo que Hugo dijo en una entrevista: “*En Chaupimayo nos convertimos en dueños de la tierra. Los cultivos y las casas del hacendado pasaron a hacer propiedad colectiva del sindicato. Se inició el reparto de la tierra.*”

Estas medidas se extendieron total o parcialmente a otros sindicatos. Nombremos jueces que sustituyeran a las autoridades burguesas. La policía iba muy rara vez y comunicaba al sindicato sus operativos. Las escuelas las hacíamos nosotros, pagábamos a los maestros (puestos por nosotros y ratificados por el Ministerio de Educación). Las obras públicas estaban en manos del sindicato, quien determinaba su prioridad. Todo esto, por supuesto, respaldado por una embrionaria fuerza armada, la milicia campesina en desarrollo. Se estaba desarrollando un proceso de poder dual y que era nuestra obligación hacer que las masas tomaran conciencia de ello. Así no nos cansábamos de explicar que las asambleas eran nuestro Parlamento, contrapuesto al Estado Burgués.”

En ese sentido, el trabajo desde las bases era urgente e indispensable. Este trabajo en Lima se llegó a hacer por parte de algunas organizaciones como la nuestra, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que buscó siempre organizar asambleas y establecer vínculos con las delegaciones que llegaron a la capital. Fueron dos bases de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la que participamos como partido para impulsar la organización de la lucha y la solidaridad. En esta actividad conocimos a grandes luchadores juveniles de Juliaca, Huancané y Putina que hoy nos apoyan a difundir estas ideas para su discusión y debate, con miras a impulsar la organización y la movilización de la clase obrera y del pueblo.



¿Por qué fue débil la participación de la clase obrera?



Por Manuel Fernández

La actitud de los trabajadores tiene que ver con el problema de su dirección, es decir de la CGTP como de la “izquierda” parlamentaria, que hacen parte del régimen establecido y que la lucha popular cuestiona de raíz planteando su derrocamiento.

La caída de Castillo destapó la rebelión de los sectores campesinos y populares del Sur identificados con él, ante la arremetida de la derecha y el Congreso corrupto que después de atacarlo con odio de clase se hicieron del poder para enterrar sus expectativas de cambio. La indignación fue mayor por la traición de Boluarte, que no solo se pasaría al otro bando sino peor aún ordenó la cruenta represión de la movilización campesina y popular etiquetándola de ser instigada por terroristas y violentistas.

El movimiento desplazó miles de manifestantes a la capital con la firme determinación de acabar con Boluarte y el Congreso ganando la simpatía de los sectores populares de Lima, de sectores de la juventud y de los trabajadores, que en buen número se sumaron a las jornadas de lucha convocadas en su apoyo. La lucha obligaría a la élite en el poder a discutir una salida a la crisis mediante el adelanto de elecciones, pero ésta no se resolvió, al final la lucha del sur se replegó y el régimen impuso su “paz”; la paz de los cementerios.

Para garantizar el triunfo se necesitaba el ingreso a la lucha del grueso la clase obrera, con sus organizaciones y su método de lucha, como el paro nacional. Pero esto no ocurrió.

La clase obrera y la lucha contra Boluarte

El ingreso de la clase obrera era decisivo no solo por su ubicación en el centro de la economía nacional

donde se mueven los grandes negocios y que podían y debían ser paralizados. Lo era sobre todo por sus numerosas organizaciones, su disciplina, su experiencia y combatividad aprendidas en años de luchas y el activismo forjado en ellas, y por su centralidad de clase, todo lo cual debía ponerse al servicio de esta gran pelea para la derrota del régimen que también era de vena antiobrero.

Sin embargo, a un año del estallido popular, queda claro que la clase obrera organizada no se involucró en esa lucha ni abrazó su causa ni sus banderas, y que esto ocurrió principalmente por su dirección política conciliadora y reformista.

Antes del estallido social, la CGTP actuaba como furgón de cola del gobierno de Castillo desmovilizando a la clase obrera y renunciando a organizar su movilización independiente por sus reivindicaciones y el cumplimiento de las promesas electorales. El resultado de esa política fue dejarle a la derecha más cavernaria toda la iniciativa para apoderarse de las calles, ganar fuerzas y avanzar en su plan de darle el golpe al gobierno, hecho que consumaría el 07 de diciembre. Esa misma actitud conciliadora llevaría a su bancada de “izquierda” a votar junto con la derecha reaccionaria por la vacancia, en nombre de la “defensa de la democracia”.

No solo esto. Además, el ascenso de Boluarte fue legitimado casi de inmediato por la dirigencia de la CGTP que rauda concurrió a Palacio a saludarla, argumentando que había que sostener la institucionalidad



Gerónimo López Sevillano, Secretario General de la CGTP.

y gobernabilidad del país, nada menos de un gobierno de inequívoco signo reaccionario y en momentos en que se iniciaba el estallido popular y ya caían las primeras víctimas.

Para justificar la represión y el uso de las armas contra los manifestantes, el gobierno, la burguesía y sus medios de comunicación atizaron una vil campaña de acusaciones contra la rebelión, señalándola como violenta y subversiva y azuzada por terroristas y desadaptados, mientras ellos se mostraban como defensores de la paz y en defensa de la democracia puestos en peligro.

Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación para establecer creencias, despertar miedos y distorsionar realidades. Pero ante su poder corrosivo la central no dijo ni pio en defensa incondicional de la lucha, y la dejó correr prestándose a la confusión que generaba en vastos sectores obreros y de las clases medias acomodadas.

El rol de la CGTP

Así, la dirección de la central contribuiría a la

confusión que mellaría la fuerza y acción de la clase obrera en la capital. De ahí que solo modestos sectores sindicales asistirían a las convocatorias oficiales, dejando las manos libres a Boluarte para ensañarse represivamente contra el estallido social que dejaría 69 muertos y cientos de heridos.

La dirigencia de la CGTP convocó a algunas jornadas nacionales en solidaridad con el conflicto. Pero estas ya estaban dosificadas y se hicieron solo con la única finalidad de aparecer al lado de los que luchaban.

Como colofón de todo, la central disfrazó su política convocando a una “Huelga Nacional Indefinida” desde el 9 de febrero sin preparación alguna y destinada a fracasar. La “huelga” se redujo a una marcha cívica, incluso con resguardo policial, la que se dirigió al Congreso y terminaría ahí donde una comisión oficial recibió a los dirigentes. Todo esto generó bronca y desazón entre los miles de luchadores que vieron en esto una traición, y produjo más confusión y desmoralización en las bases obreras que veían a las acciones

convocadas por la central como un pasacalle.

¿Qué hacemos ahora?

La pobre participación de la clase obrera en esta gran lucha se explica, entonces, por la política de su dirección que actúa como correa de transmisión de los intereses de la patronal y del Estado en el seno de la clase obrera, manteniéndola despolitizada y alejada de las grandes luchas que se libran en el país.

De aquí se entiende también que esta dirección la mantenga encasillada en la lucha de cada uno por sus pliegos de reclamos, con la falsa idea de que así lograrán mejorar sus condiciones de vida y trabajo cerrando los ojos ante los que manejan el gobierno.

Con este papel de la central ante la lucha del sur no solo se la dejó a su suerte y presa de la respuesta represiva del gobierno, sino también se perdió la oportunidad de infligirle una derrota al gobierno y al Congreso y gestar una salida política independiente en la vía de realizar el programa de cambios que tanto necesitamos.

El nefasto rol de la dirección de la central durante dichas jornadas históricas, no debe llevarnos a cuestionar la importancia de la CGTP y de los organismos sindicales para la organización de la pelea. Más bien debe llevarnos a dar la pelea por cambiar a dichos dirigentes. Una tarea que solo podremos llevar a cabo persistiendo en la lucha y construyendo una nueva dirección verdaderamente clasista y revolucionaria.



Las banderas del sur y el germen de la revolución



Por Víctor Montes

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, los pueblos del interior, particularmente del sur del país, se levantaron exigiendo, con absoluta justicia, el respeto a su voluntad expresada en el voto por Castillo y, de fondo, la democratización de la sociedad peruana, expresada fundamentalmente en la exigencia de Asamblea Constituyente.

El detonante del levantamiento, fue la detención e inmediata vacancia de Pedro Castillo, tras su fallido intento de golpe de estado, y la conformación de un gobierno hipotecado a los sectores más reaccionarios, conservadores, racistas y antipopulares que dominan el Congreso (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza por el Progreso, Acción Popular...).

Un gobierno que fortaleció los elementos autoritarios del régimen democrático en crisis, disparando contra el pueblo y reeditando el acostumbrado desprecio contra los sectores populares, particularmente la población proveniente de la sierra, por medio del conocido "terruqueo".

Un año después, los motivos tras el levantamiento siguen intactos: Boluarte sigue al frente del gobierno. La mayoría reaccionaria del Congreso avanza en su agenda antipopular. Y sobre todo, la miseria crece en el país y la discriminación, marginación y opresión contra el pueblo y las nacionalidades originarias se acentúan en este contexto.

Elementos de fondo

Tres elementos se combinan en la base del estallido y levantamiento de los pueblos del sur: la miseria a la que nos condena un desarrollo



Cusco: en diciembre empezaron las manifestaciones exigiendo cierre del Congreso del Perú y nuevas elecciones.

capitalista completamente sometido al dominio imperialista. Dos, la frustración continua del pueblo con una democracia hipotecada a los mandatos empresariales. Tres, la permanente discriminación y opresión a la que son sometidos los pueblos del interior y las nacionalidades originarias. Opresión que sirve al capital, tanto al dividir al pueblo como para extraer la mayor cantidad de plusvalía posible en su explotación.

Estos tres elementos escalaron durante el gobierno Castillo, tras años de descomposición y crisis de la democracia colonial que se expresaron en los continuos cambios de gobierno (5 presidentes en 7 años). Y finalmente estallaron, mostrando el fracaso de la República construida bajo los intereses de la corrupta oligarquía empresarial durante los últimos 30 años. Fracaso que evidencia la incapacidad de la clase burguesa de nuestro país a lo largo de 200 años de independencia, para crear condiciones de desarrollo

y bienestar para toda la población.

Las banderas del estallido

Y es ese fracaso de la democracia criolla, capitalista y sometida al imperialismo, el que enfrentaron los pueblos del sur con su levantamiento, materializando esa justa rabia y anhelo de cambio en las consignas "¡Fuera Dina Boluarte! ¡Cierre del Congreso! ¡Elecciones inmediatas! ¡Asamblea Constituyente!". Era la forma que encontró el movimiento de plantear que era necesario echar abajo todo.

La respuesta de la "democracia"

La respuesta de esa democracia falsa fue la represión sangrienta. No podía ser de otra forma. El Estado, como siempre hemos comprendido desde el marxismo, es fundamentalmente un aparato que organiza la violencia de la clase dominante contra las clases dominadas, oprimidas y explotadas.

La forma que adquiere en cada momento (república democrática,

dictadura militar, monarquía parlamentaria...) es solo la envoltura con la que presenta esa dominación violenta.

En ese sentido, la "democracia" es la que mejor maquilla esta realidad, pues hace pensar que "todos" son responsables por lo que sucede ya que "tienen derecho a elegir". Logra esta falsa idea por medio de elecciones, parlamentos y mesas de diálogo. Pero en la hora de la verdad, también la democracia descubre su rostro represor.

"Democracia" y nación

Y fue justamente la represión sangrienta desatada por el gobierno, y su campaña de "terruqueo" llena de desprecio contra la población aymara, andahuaylina y puneña, que ya había sido insultada y estigmatizada de forma impune por la burguesía y sus hinchas de las clases medias urbanas durante la campaña electoral, la que incorporó plenamente a la lucha las banderas de la identidad nacional de los pueblos quechua

y aymara, discriminados y oprimidos consuetudinariamente por desde la colonia.

Con esto, la democracia criolla y sometida al imperialismo dejó ver su otro fracaso: además de su imposibilidad de generar bienestar para el pueblo, se mostró incapaz de constituir, no ya una "nación" peruana, sino un proyecto integrador, en el que las nacionalidades herederas de los pueblos que fueron subyugados por los españoles, hagan parte con igualdad y plenos derechos, para gozar de sus beneficios.

Una nueva traición

Todo lo anterior propició que el levantamiento del sur no tuviera, para terror de la oligarquía empresarial y sus agentes en el Estado, gente dispuesta a "negociar". Esto es, a corromperse ante su poder y dinero.

Esto hizo que, mientras la lucha fue dirigida directamente por las organizaciones populares del sur, con el pueblo puneño y aymara a





Foto: Lucas Aguayo Araos / Europa Press

Las mujeres andinas, tanto en el interior como en Lima, también marcharon contra la criminalización y terruqueo de las protestas pacíficas del Sur Andino.

la vanguardia, en forma independiente de las viejas organizaciones reformistas que se dicen “de izquierda”, puso en vilo la continuidad del gobierno, e incluso abrió la posibilidad de imponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como sucedió en Chile en 2019.

Si esto no sucedió, fue justamente porque las direcciones tradicionales del movimiento obrero y popular (el Partido Comunista, Patria Roja) y la izquierda parlamentaria (Nuevo Perú) jugaron a impedir que los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre de las ciudades, se incorporen a la lucha en forma plena y combativa.

Todo lo contrario, lucharon por dividir la movilización para capitalizarse desde su actuación en el podrido Congreso. Es decir, lucharon por desviar la lucha a los cauces de la misma vieja y falsa democracia.

Como no podía ser de otra forma, todos sus intentos por conciliar y obtener los votos necesarios para “adelantar las elecciones” –que no es lo mismo que echar abajo al gobierno– terminaron en un punto muerto, sirviendo de base para el fortalecimiento de los sectores reaccionarios y del propio gobierno Boluarte.

La clase obrera y la lucha del sur: una sola perspectiva

Esta política de las direcciones llevó a que la clase obrera se viera imposibilitada de ingresar a la lucha para definir hacia dónde caía la balanza con su método (la huelga general).

La clase trabajadora, y particularmente la clase obrera de nuestro país, comparte el mismo origen étnico y cultural que los pueblos que se levantaron en el interior. Migrante, o descendiente de migrantes, las obreras y obreros del país son de raíces puneñas, ayacuchanas, huancaínas, loretanas, huancavelicanas, iqueñas, lambayecanas, cajamarquinas y un larguísimo etcétera. También tienen origen afro y chino.

Por eso, el movimiento del sur gozó de la amplia simpatía de la clase trabajadora, que tomó sus banderas, pero no tuvo opción para salir a luchar.

Está claro que las masas pobres y trabajadoras de las ciudades tienen la misma necesidad de echar abajo esa “democracia” podrida y sometida al imperialismo, que es la garantía de los regímenes de super explotación y miseria en la que viven y con los que se llenan los bolsillos sus patrones.

En la experiencia de la explotación y la lucha contra ella, la clase obrera

que tiene diversas procedencias, costumbres, sexo e identidad de género y orientación sexual, se reconoce como una sola, se organiza y construye una perspectiva verdaderamente democrática e integradora.

Por eso, es imprescindible que la clase trabajadora, y dentro de ella la clase obrera organizada, haga suya las banderas que levantó el sur y las combine en su programa de lucha y acción contra el alza del costo de vida, por mejoras en el salario, la salud y la educación, etc. para hacerlo realidad mediante construcción de su propio poder, en alianza con las organizaciones del pueblo pobre y las nacionalidades originarias.

Esto es, la conquista de un gobierno obrero, campesino, popular, que a partir del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, las invite a ser parte, de pleno derecho, de la construcción del país.

Porque la revolución peruana será en primer término, una lucha por la liberación del país del yugo imperialista y la ruptura con las relaciones sociales que se han combinado para sustentar dicha dominación: la explotación capitalista del trabajo y la tierra, y la opresión de las nacionalidades

originarias, heredada de la colonia. Una revolución que haga por fin realidad las banderas de la democracia, burlada hasta el día de hoy por la República de la oligarquía empresarial.

Esto mismo es lo que comprendió Mariátegui a principios del siglo XX, cuando en 1928 definió en el programa del Partido Socialista que él fundó que “...Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir...”.

Pero la clase obrera en el poder, aliada al pueblo pobre y oprimido, no se detendrá en la realización de las banderas que ha planteado el sur. Tal como propuso el revolucionario ruso León Trotsky, al tiempo que hace realidad ese programa, impondrá el control obrero sobre la producción, la expropiación de las grandes minas, pozos petroleros, fábricas y demás medios de producción hoy en manos de los capitalistas y el imperialismo. Esto es, colocará el conjunto de la economía al servicio de las necesidades de todo el pueblo pobre. Y en ese sentido, la lucha por las banderas democráticas debe fundirse en la lucha por la

construcción de la sociedad socialista.

Una dirección que lucha por esta banderas

Como apuntamos hace unas líneas, mientras las direcciones del sur guiaron la lucha con independencia, la perspectiva de la victoria del movimiento estuvo planteada gracias a su consecuencia y combatividad. Así de determinante es la dirección, en el momento en que estalla la crisis.

Sin embargo, para cumplir con lo que hemos planteado en estas páginas, hace falta una dirección superior a la que ha tenido hasta ahora el movimiento. Una dirección que, además de consecuencia y combatividad, sea capaz de ligar la lucha y banderas de los pueblos del interior, particularmente los del sur, con la única estrategia que puede garantizar su realización: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras, campesinas, populares y de las nacionalidades oprimidas.

Esta tarea, de primer orden, debe concretarse en la construcción del partido revolucionario, que bajo la guía de la teoría marxista, organice la lucha y la posterior construcción de la nueva sociedad, que tendrá que ser socialista.



El lugar de la Constituyente



Por Víctor Montes

Como hemos escrito anteriormente, la demanda de Asamblea Constituyente (AC) se ha transformado, en el país, en la expresión genuina del anhelo de cambio del pueblo pobre. Esto se vio con particular claridad en la lucha de principio de año, encabezada por las poblaciones del sur, convirtiéndose en una de las consignas centrales de la lucha.

Dos caras de una misma consigna

Con la demanda de AC, los pueblos han manifestado su deseo de echar abajo la democracia corrupta que vivimos. Esto es, una democracia donde no importa quien gane, una y otra vez, termina imponiéndose el interés del gran capital, que deja el paso libre al saqueo de nuestros recursos, y desprotege a los trabajadores y trabajadoras del país. Todo en nombre del libre mercado.

Por eso, además de cambiar las instituciones del Estado, la demanda de AC busca también cambiar las reglas del juego para pasar a recuperar los recursos naturales, y lograr un cambio en el rol económico del Estado, actualmente absolutamente entregado a los intereses transnacionales.

En ese mismo sentido, existen sectores de la clase trabajadora urbana, y del proletariado rural, que han entendido que la constitución de la dictadura fujimorista, impuesta en 1993 y aún vigente, es el candado que asegura las condiciones de explotación y miseria en la que viven. Esos sectores también abogan por una nueva constitución, nacida de una AC.

Sin embargo, existe otro sector que levanta



Ataúdes y pancartas en Huamanga, Ayacucho, denuncian los muertos ocurridos durante las protestas.

la misma demanda en un sentido distinto: la izquierda reformista. Estas organizaciones y personajes (Nuevo Perú, el Partido Comunista, Patria Roja, Perú Libre, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, el Bloque magisterial, etc.), adictos a las elecciones, hacen campaña consciente para que el pueblo pobre piense que la AC es la solución de fondo a todos los males del país.

Es decir, para que pongan sus expectativas –nuevamente– en las elecciones, y no en su propia lucha y movilización.

Medias verdades...

Desde el marxismo, y nuestra postura, la demanda de Asamblea Constituyente juega un papel progresivo en tanto es expresión del hartazgo popular con la realidad que vivimos, propiciando su movilización contra el gobierno y el régimen democrático podrido y sometido al imperialismo que impera en el país. Por

eso hace parte de nuestro programa de demandas.

La clave, para nosotros, es que dicha demanda está supeditada a la estrategia de poder que levantamos para el conjunto del país: la toma del poder por parte de las organizaciones obreras y populares. Es decir, la conquista de un gobierno obrero, campesinos y de las nacionalidades oprimidas (quechua, aymara, asháninka, shipiba, etc...) que decida en forma soberana, y sin la participación de las grandes empresas, el destino del país.

Por eso, cuando pensamos en AC, de inmediato agregamos: AC para nacionalizar las minas, el gas y el petróleo. AC para devolver las tierras y territorios, hoy en manos de mineras, petroleras y forestales, a las comunidades nativas y campesinas. AC, para garantizar el derecho libre de sindicalización y huelga. AC, para que todo cargo público gane lo mismo que un maestro o

maestra de escuela pública. etc.

Es en esa discusión y permanente movilización por la conquista de la AC, que esperamos que la lucha se desarrolle hacia la toma del poder.

Sin embargo, no podemos dejar de decir que las expectativas que los sectores del interior y la propia clase obrera tienen en la AC expresan, como escribimos en otra oportunidad, *"...la confianza que esos mismos sectores tienen en las instituciones de la democracia patronal, a la que nunca han accedido plenamente, y por tanto, mantienen la esperanza de llegar a solucionar sus más sentidos problemas por su concurso."*

Es esta expectativa la que alimentan los partidos y grupos que se hacen llamar "de izquierda" para desviar la movilización obrera y popular.

Entonces... ¿Qué papel tiene la AC hoy?

En tal sentido, reiteramos el lugar que esta consigna tiene para nosotros,

que construimos un partido obrero, marxista y revolucionario en el país: justo anhelo del pueblo pobre y trabajador, e impulso de la movilización.

Y es por eso, retomando lo que ya hemos dicho, que *"...resulta clave que el movimiento obrero, en tanto avanza en su politización y retoma el camino de la movilización... tome en sus manos esta bandera (la AC) de manera combativa y consecuente."*

En la coyuntura que vivimos, la demanda de AC se transforma en una bisagra capaz de articular las reivindicaciones del campo y la ciudad unificándolas contra el gobierno asesino de Boluarte y el Congreso...

Y añadimos. Esa bisagra debe ayudarnos a forjar lazos de lucha y confianza entre los sectores del campo y del interior, con la vanguardia obrera combativa. En la lucha, debemos desarrollar el debate profundo de la necesidad de poner esa AC al servicio de romper los lazos que atan al país al imperialismo, recuperando los recursos naturales y la tierra. Mejorar de manera real las condiciones de vida del pueblo pobre, y romper los privilegios de la costra podrida y corrupta que administra el Estado.

Y por lo mismo, explicar nuevamente que solo un gobierno del pueblo pobre y trabajador, de sus organizaciones de lucha, en alianza con las organizaciones combativas del campo y las nacionalidades oprimidas, sin patrones ni sus partidos, podrán defender y hacer realidad esas medidas y, por tanto, que es la única salida de fondo a los problemas que nos aquejan.



Ante la criminalización de las luchas

Nuestro derecho a la protesta y autodefensa

El escenario principal donde el Estado asesinó fue en inmediaciones de los aeropuertos. No debería generar mucha polémica que los manifestantes intenten tomar un aeropuerto u otra instalación mediante el cual generar presión sobre el ente contra el cual protestan; no obstante, aquí se nos vendió que eso está mal y que no tendrían por qué los manifestantes ir al aeropuerto (dando luz verde a la represión). Cuando no solo en la historia, sino, por los mismos días en Francia los manifestantes ingresaban a los aeropuertos e incluso incendiaban edificios públicos para obtener la atención del gobierno. Mientras que en Perú se asesinaba a mansalva en Francia la situación era diferente.

Tenemos derecho a la protesta. En la fábrica el obrero va a la huelga, así genera presión sobre la patronal. ¿cómo generarían presión los pueblos o sectores populares que luchan? Tomando carreteras, aeroportos,



Foto: Lucas Aguayo Aros / Europa Press

Autodefensa. La violenta represión de las FF.PP. y FF.AA. planteó la necesidad de formar **Brigadas de escuderos** para proteger a los marchantes.

puertos, instalaciones o infraestructura pública e incluso privada. Es legítimo el mecanismo que las masas aprueben para hacer presión contra el gobierno y obtener atención a sus pedidos o demandas. La toma de infraestructuras y el enfrentamiento con la policía es de lo más normal en una protesta, desde que existen las protestas; por lo que los manifestantes deben saber no solo protegerse sino repeler la agresión estatal.

La autodefensa es necesaria porque la policía meten infiltrados o provocadores para justificar

la represión, y la muerte incluso. Cuando un sector social decide protestar contra el gobierno o la patronal, los medios de comunicación y el aparato represivo estatal construyen un escenario justificativo de la represión en ciernes. Buscan desacreditar la causa, los métodos y a los actores, para que cuando se desate la represión, no haya resistencia. Al fragor de la lucha nace de forma orgánica y objetiva la necesidad de autodefensa; eso es inevitable en el proceso. Por ende, no deberíamos esperar a que "nazca orgánicamente" esa necesidad, debemos prepararnos previamente para responder seriamente a la represión. Quien proponga a las masas ir a las protestas sin implementos de autodefensa los está llevando al matadero, así le hacen el juego al gobierno que debilita la lucha a través de la represión, heridos y asesinados.

La autodefensa en las protestas no solo significa

repeler los ataques de las FF.AA. de forma directa, sino, también los ataques realizados por los provocadores; por eso, la organización de escuadrones de disciplina interna que neutralicen a los provocadores será importante. Los ataques que vimos contra las brigadas de primeros auxilios en Juliaca (mataron a un médico voluntario) y otras partes del país no son una mera casualidad o fallo en la operación de las FF.AA., así funcionan los organismos represivos; lo mismo pasó en Chile durante el estallido social del 2019, Israel hace lo mismo en la Franja de Gaza y así sucede en todas partes donde el pueblo sale a luchar contra la clase social dominante.

Negar el derecho de las masas a la autodefensa es perder objetividad y desconocer la historia, el funcionar del Estado y sus órganos de represión. Quieren hacernos creer al

pueblo y a los que se movilizan que la policía y las FF.AA. están para protegernos, para cuidarnos y que su presencia en las movilizaciones es inocua mientras nosotros estemos "tranquilos".

La naturaleza del Estado y sus FF.AA. es la violencia sistemática y organizada contra un sector social sometido, por ende, no podemos esperar que nos traten con guantes de seda, ellos vendrán a golpear, a reprimir y si las circunstancias lo demandan (como hace un año) vendrán a matar y cometer todo acto que permita la derrota o el aplastamiento de la protesta o intento de cuestionar el orden.

Por eso, la autodefensa es un derecho al que no podemos renunciar y urge ejercerlo. Así como la exigencia de derogatoria de toda normativa que criminalice la protesta, como el DL que acaba de promulgar el gobierno, sancionando con 15 años de cárcel a quienes bloqueen carreteras.





Israel rompe el alto el fuego y redobla su ofensiva genocida



Por Daniel Sugasti

El alto el fuego pactado entre Israel y Hamás, con mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, ha terminado. El Estado sionista retomó, con más fuerza que antes, los bombardeos indiscriminados en Gaza, cuya sanidad denuncia que, por lo menos, 200 personas murieron el viernes y otras 600 resultaron heridas.

Más de 400 ataques aéreos, de norte a sur, castigaron a los habitantes de la Franja, la mayor cárcel al aire libre del mundo. La Media Luna Palestina denuncia que los sionistas prohibieron la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah “hasta nuevo aviso”.

Netanyahu declaró que las negociaciones están en “punto muerto” y retiró sus negociadores de Qatar. Reafirmó, además, su “compromiso” con tres objetivos: “liberar a los rehenes, eliminar a Hamás y asegurarse de que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para los residentes de Israel”. Sin embargo, la delicada cuestión de los presos israelíes en manos de Hamás y otras milicias palestinas sigue siendo un factor de crisis interna. Las familias acusan al gobierno de indiferencia y negligencia. De hecho, los intensos bombardeos sionistas costaron la vida de muchos israelíes detenidos en Gaza.

Por su parte, Hamás declaró: “Lo que no lograron antes de la

tregua no lo lograrán después de ella”. Medio centenar de proyectiles fueron lanzados desde Gaza hacia el centro y sur de Israel, hecho que muestra que Hamás mantiene cierta capacidad militar. Esta cuestión también generó polémicas dentro de Israel. La crisis interna, por otra parte, se avivó con el reportaje del New York Times que reveló que las autoridades y servicios de inteligencia israelíes conocían los planes de un ataque en gran escala desde Gaza hace más de un año. Sin embargo, esos informes fueron desestimados. No es exageración decir que Netanyahu y su gabinete repleto de nazis apuestan todo su destino político en la ofensiva contra los palestinos.

La tregua permitió el canje de 105 israelíes en manos de Hamás por 240 mujeres y menores de edad presos en cárceles de Israel. Además, el acuerdo incluía la entrada de 200 camiones de ayuda humanitaria al día, incluyendo combustible, aspecto que, según Hamás, no se cumplió cabalmente.

Estados Unidos, evidentemente, echó la culpa del fin de la tregua a Hamás. Sin embargo, es posible advertir la crisis en las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, que advirtió, con cierto tono de reprimenda, que es “imprescindible que Israel actúe de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales y las leyes de la guerra” y añadió que “no puede repetirse” en el sur las “perdidas masivas de vidas de civiles” ni el “desplazamiento de la escala” que se produjo en el norte. El gobierno de Biden, presionado por las críticas domésticas que alcanzan incluso sectores del partido demócrata, intenta incorporar el elemento “humanitario” en sus declaraciones, sin que eso signifique ningún obstáculo real a la ofensiva genocida de Israel.

Hasta el 24 de noviembre, más de 15.000 personas, entre ellas más de 6.150 niños y cerca de 4.000 mujeres, habían muerto en Gaza. Casi la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja

fueron forzados a dejar sus hogares y huir hacia el sur.

El alto el fuego, aceptado forzosamente por parte de Israel, fue un alivio fugaz para los palestinos. Como alertamos, la ofensiva israelí fue retomada con intensidad redoblada. La única alternativa para el pueblo palestino, en unidad con los demás pueblos árabes, es la derrota político-militar del Estado sionista. Mientras exista ese Estado nazi, no habrá paz ni en Palestina ni en la región. El gobierno sionista pretende el control directo de Gaza, como parte de un plan de exterminio de los palestinos, tildados de “animales humanos”.

La limpieza étnica, más cerca de ser una “solución final”, continuará. Por eso, es fundamental no dar tregua en la campaña y en las movilizaciones contra el genocidio en Gaza. Hay que plantear la salida de una Palestina única, laica, democrática y no racista, una bandera que, a su vez, presupone la destrucción, el desmantelamiento completo, del Estado sionista de Israel.



Partido Socialista de los Trabajadores – PST
Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

